

El Plan Colombia, lo bueno y lo malo

Sobre el Plan Colombia aún no se ha dicho la última palabra. Sin duda, la dirección que tomará el Plan definirá en buena parte el futuro a corto y mediano plazo de la sociedad colombiana. Estados Unidos es como principal proveedor de recursos importante agente del Plan Colombia; hace apenas unas semanas el Presidente Clinton visitó al país con el fin de brindar apoyo político al Presidente Pastrana.

Con el fin de tener mayores elementos de juicio sobre lo que se persigue con el Plan Colombia y cuáles serían las consecuencias de su aplicación para la economía y la sociedad colombiana, Economía Colombiana organizó una tertulia el pasado 8 de agosto, en la cual participó un nutrido grupo de expertos, encabezado por el Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez; el Ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez; el Senador Amilkar Acosta; el Obispo de Sincelejo Nel Beltrán; el ex Gobernador de Antioquia Alvaro Uribe Vélez; el empresario Juan Sebastián Betancur; el Representante a la Cámara Gustavo Petro; el General Henry Medina; el vicecontralor José Félix Lafaurie; la Presidente del Consejo Editorial de Economía Colombiana María Mercedes Cuéllar, entre otros. La reunión fue presidida por el Contralor General de la República Carlos Ossa. Pablo Molina introdujo el tema con un análisis sobre el Plan Colombia. Acá se presen-

tan extractos de su presentación. El documento se publica en su totalidad en otros apartes de esta misma edición¹.



Un Plan de 7.200 millones de dólares

De acuerdo con Molina el objetivo central del Plan es reducir en forma sustancial los cultivos de coca en la zona sur del país. No sólo se afectaría la oferta sino también a aquellos grupos que tienen un interés en que se cultive y en ofrecer servicios de protección como es el caso de la guerrilla, particularmente las Farc. El Plan es específico en presentar soluciones para cada uno de los grupos involucrados. A los cultivadores les ofrece una salida a través de sustitución de cultivos. Contra los narcotraficantes y los grupos que los protegen, la solución es militar.

Por su parte, los socios en este esquema tienen intereses concretos. Los Estados Unidos buscan racionalizar la oferta de droga que llega a su país; los europeos tienen un problema similar aunque le dan un énfasis más social. En el caso colombiano el problema es cómo recuperar la presencia del Estado en los territorios afectados.

La financiación total del Plan asciende a US\$7.200 millones, de los cuales US\$4.000 millones provenían de Estados Unidos, los países europeos y préstamos de la banca multilateral. Hasta ahora lo más concreto es la aprobación del paquete de ayuda a Colombia por parte del Congreso de Estados Unidos.

Molina analizó los alcances del Plan desde un contexto teórico. Identificó tres posibles escenarios en la lucha contra el narcotráfico basados en el comportamiento del mercado de drogas. En el primero, el efecto predominante es el de los precios. La segunda posibilidad consiste en que los controles, tanto sobre la oferta como sobre el consumo, sean más fuertes que el efecto precio. La tercera es una combinación de los dos escenarios anteriores: controles estrictos a la oferta mientras se mantiene en el consumo la prevalencia del factor precio como regulador del mercado. Esto quiere decir que en Colombia se aplica una política similar a la establecida en el Plan Colombia, mientras que Estados Unidos se continúa restringiendo el consumo vía precios e implementando políticas educativas. Resaltó que en este caso surgen episodios en los que el exceso de oferta induce la caída significativa de los precios, seguidos

Los Estados Unidos buscan racionalizar la oferta de droga que llega a su país; los europeos tienen un problema similar aunque le dan un énfasis más social

1 «El Plan Colombia ¿es un plan anti-narcóticos o un plan de desarrollo», pág. 5-14 y Molina y Castillo: «La lucha contra el narcotráfico: un marco teórico», pág. 25-31.

de crecimientos importantes en el consumo. El incremento en el consumo desata mayores controles sobre la oferta y en la medida en que surjan restricciones de oferta en los países productores, por ejemplo como causa del Plan Colombia, el precio sube contrayendo el consumo en los mercados industrializados. Para Molina, la solución teórica evidencia que un mercado con estas características no alcanza el equilibrio ya que evoluciona cíclicamente alrededor del mismo. La enseñanza del modelo teórico es que los posibles resultados del Plan Colombia serían parciales en el corto plazo y generarían una reducción en los cultivos, más no su eliminación. En su opinión es posible esperar su erradicación en la zona sur del país, pero se produciría un desplazamiento hacia otras áreas del país o hacia otros países.

Resaltó que en el momento actual estamos en una situación de exceso de oferta, en la que los precios son demasiado bajos y la can-

tidad de droga que llega al mercado estadounidense es considerable. De ahí el interés de los Estados Unidos en apoyar un programa como el Plan Colombia.

Para finalizar señaló que a la sombra de los narcotraficantes la estructura de poder que tenía el país cambió. Hoy el problema no es sólo erradicar el narcotráfico, sino recobrar el control de todo el país para los colombianos. Ya que se tiene una estrategia para manejar el problema del narcotráfico, la pregunta es cómo ponerle a esa estrategia una adicional que permita construir la Nación que necesitamos para que los colombianos vislumbren un país con crecimiento y mayor igualdad.

En vez de helicópteros, tierra y crédito

Para el Representante a la Cámara Gustavo Petro, la idea subyacente del Plan es debilitar la guerrilla y, al mismo tiempo, fortalecer el paramilitarismo, con un resultado grave para Colombia pues en diez años se estaría hablando de otro plan Colombia.

Según Petro, en Colombia se habla de la demanda e incluso de la necesidad de legalizar la droga en el ámbito mundial para evitar pensar en cómo solucionar el asunto de la oferta. Cuando éste problema se discute generalmente se impone una visión militar como la del Plan Colombia.

Prevé que el efecto del Plan será que una gran cantidad de población va a ser expulsada. Para Petro existe un gran interrogante sobre la viabili-

dad de la sustitución de cultivos en esas regiones además de los altos costos económicos y ecológicos que ella conlleva, entre otras cosas porque la sustitución en la selva amazónica implica diez veces más superficie de la que actualmente usa el cultivo de la coca. A su juicio, el objetivo de este tipo de soluciones es eludir un cambio en las relaciones de poder local y nacional. "Lo que se quiere es mantener las estructuras de poder existentes", anotó. Para Petro la razón por la cual la población termina en la economía de narcotráfico en el borde de la selva es porque no tiene a dónde ir. Hay que ligar este tema con el de reforma agraria. Señaló que de las 26 millones de hectáreas que Colombia tiene dedicadas a la ganadería extensiva, ocho millones -que en su concepto es la tierra más productiva del país- sirven para cultivar. En términos de empleo, si esa tierra se cultivase se pasaría de 200 mil trabajadores a cerca de un millón 800 mil. Concluyó que ésta sería la fórmula más eficiente para destruir la corrupción y el narcotráfico: sin sangre, sin muertos, sin problemas de daños sociales. El mismo dinero que se usa para el Plan Colombia se podría destinar a la compra de esas ocho millones de hectáreas: "En vez de helicópteros, tierra y crédito".

La línea dura encontró su escenario cuando las Farc mataron los tres gringos

Para el senador Juan Manuel Ospina, los países andinos no han podido definir una estrategia contra las drogas diferente a la formulada por el gobierno de Estados Unidos, con excepción del Perú, que presentó una propuesta alternativa en sus fundamentos como respuesta a la estrategia antidrogas de Bush del año 89. Para Ospina el principio básico de la estrategia peruana radica en que se buscaba incorporar a la legalidad



Foto: Mauricio Hoyos G. - CGR

al pequeño productor; es decir, no se pretendía aislarlo ni penalizarlo. Adicionalmente, el Gobierno peruano estaba dispuesto a jugársela a fondo para que esta población no quedara amparada por los narcotraficantes ni por los terroristas - como llaman allá a la guerrilla-, sino por el Estado. Por último, señaló que el programa incluía una política de desarrollo alternativo y no de sustitución de cultivos, lo cual, a su juicio, implica una diferencia conceptual importante. El Congreso norteamericano aceptó esa decisión, y sobre esa base el gobierno peruano trabajó con el norteamericano. "Fujimori puede tener muchos defectos pero es capaz de hablarle francamente a Estados Unidos cuando toca", puntualizó.

Mencionó que los resultados han sido espectaculares: de 210 mil hectáreas en cultivos de coca, pasaron a 38 mil. Además, la caída acelerada de la narcoeconomía conllevó el desmonte de Sendero Luminoso, cuya base principal de financiamiento estaba allí.

De acuerdo con Ospina, Colombia arrancó por un camino que poco a poco se iba a parecer al peruano pero desafortunadamente esta solución se frustró. En un principio, el Plan Colombia que había sido incorporado en el Plan de Desarrollo, el cual fue declarado inexecutable por razones de procedimiento por la Corte Constitucional, centraba la acción en una agresiva política de desarrollo alternativo y no en la fumigación. La visión del gobierno estaba todavía marcada por el sesgo PNR. Se creía que era necesario hacer inversión pública en las zonas de conflicto. En el Senado muchos opinaban que había que mirar el problema de los cultivos de coca en el contexto de la crisis rural general. Se consideraba que se debía atacar las causas y no los síntomas, como expuso Petro. Era la gran oportunidad para hacer un reordenamiento rural de fondo.



Foto: Mauricio Hoyos G. - CCR

Juan Manuel Ospina: con la fumigación se acaba legitimando a las Farc

Para Ospina la situación colombiana se enredó el día que las Farc mataron a los tres indigenistas gringos. Inmediatamente el gobierno norteamericano declaró como terroristas a las Farc y la línea dura, la de los fumigadores, encontró un escenario propicio. En ese momento comenzó la reformulación del plan Colombia que significó pasar el centro de gravedad del desarrollo alternativo a la fumigación. "En un contexto en que hay que meter Blackhawks, el componente militar se da por añadidura" agregó. Según Ospina, es un gigantesco error pensar que por esa vía se va a debilitar a las Farc. Si el Estado se le va encima a esta población campesina acaba de legitimar a las Farc en el sur del país, tal como ocurre con la fumigación: entre más se fumiga más hectáreas sembradas hay. Por ahí, dijo, se puede comprometer lo que le queda de legitimidad al Estado en el sur del país. En su opinión, hay que buscar emparejar la situación militar con las Farc, pero no se puede meter la población de por medio.

El Plan Colombia no pasó por el cedazo de la concertación

El senador Amilkar Acosta indicó que su exposición abarcaría cinco aspectos. El primero es que ninguna de las versiones del Plan

Colombia fue concertada. Es decir, la población objetivo ha jugado un papel absolutamente pasivo respecto a su formulación y conceptualización. Al juicio del senador Acosta el Plan Colombia terminó por suplantar el Plan de Desarrollo del país el cual fue aprobado de acuerdo a lo que estipula la Constitución y la Ley, mientras que el Plan Colombia no pasó por el cedazo de la concertación con las comunidades -que hoy llaman la sociedad civil. Afirmó que contrario a la presentación que se ha hecho en forma reiterada, el Plan Colombia no es un plan de Estado sino un plan de Gobierno. Este fue el reclamo que le hizo la Unión Europea al Gobierno de Colombia cuando se estaba en los preparativos de la mesa de aportantes en España.

En segundo lugar, mencionó que se hace énfasis en la parte bélica o en el aspecto social, según el auditorio. De esta manera, anotó, es posible que el Gobierno de los Estados Unidos escoja la erradicación y la Unión Europa aporte para la sustitución. La pregunta que surge es si esas dos estrategias son compatibles. Algunos estudiosos afirman que con una estrategia de erradicación, es muy difícil ganar la confianza de los campesinos y raspachines, indispensable para un plan de sustitución, pues ellos asumen la fumigación como una agresión a sus comunidades.

Otro aspecto destacado por Acosta es el de la financiación del Plan y el énfasis que tiene en el aspecto militar. Como se sabe su costo es de US\$ 7.200 millones, de los cuales el 30% es para el combate del narcotráfico, es decir para fumigación.

Contrario a la presentación que se ha hecho en forma reiterada, el Plan Colombia no es un plan de Estado sino un plan de Gobierno

Se prevé que los Estados Unidos aportarán US\$ 1.500 millones, la Unión Europea US\$ 1.250 millones, US\$ 750 millones serán créditos reembolsables de la banca multilateral, y finalmente US\$ 4.000 millones serán aportados por Colombia. Acosta se pregunta de dónde va a salir el aporte de Colombia, si incluso el Presupuesto del 2000 está desfinanciado en un 40%. La respuesta que ha dado el Gobierno es que es un estimativo de los recursos que se han venido gastando y los que prevé se van a gastar en el resto del período constitucional en aspectos que de alguna manera tocan con el Plan Colombia. Respecto a los aportantes de la Unión Europea, lo único con-

le debe informar al país. En su opinión no hay que buscar revestimientos para decir que ese es el propósito esencial y para eso es para lo que hay recursos. Acosta cree que el narcotráfico debe ser combatido sin tregua pero señaló que la estrategia que se ha seguido en la lucha contra el narcotráfico -concretamente en el tema de la fumigación- ha sido equivocada, tal como lo ha indicado un premio Nobel de la Paz y algunos expresidentes entre los cuales se encuentra Belisario Betancur. Recordó que en los últimos ocho años, según estadísticas de la DEA, Estados Unidos invirtió en fumigaciones 700 millones de dólares, con la consecuencia de que el área sembrada en cultivos ilícitos se duplicó. Cuando se miran estos resultados, se concluye que no es posible alcanzar el propósito de erradicar el 100% de los cultivos ilícitos en los próximos cinco años, tal como se comprometió el Gobierno de Colombia, de acuerdo con la versión norteamericana del Plan Colombia (en la versión colombiana ese compromiso es de 50%, anotó). Añadió que la fumigación va a tener efectos colaterales graves, como ocurrió en la

La conjuntura preelectoral en Estados Unidos

Por último, para Acosta es importante mirar el grado de responsabilidad de los diferentes participantes en el desarrollo del Plan. No ve que haya un serio compromiso de los Estados Unidos y de la comunidad internacional para combatir todos los eslabones de la cadena. Según las cifras de la DEA, en el mercado al detal de los Estados Unidos las exportaciones de cocaína valen aproximadamente US\$ 46 mil millones al año y estiman que se repatrian a Colombia US\$ 3.574 millones. ¿Dónde se queda el resto? ¿será que simplemente a través de la interdicción del narcotráfico y de la fumigación se va a poder resolver el problema del narcotráfico? Acosta considera que en buena medida lo que le interesa al gobierno de Clinton es mostrar que está decidido a luchar contra el narcotráfico, en esencia por una coyuntura preelectoral en los Estados Unidos, sin importar que a la postre los resultados sean similares a los registrados hasta ahora.

Le preocupa que no haya unidad de criterio dentro del mismo gobierno, pues mientras el Presidente niega que exista la narco-guerrilla, el General Tapias asegura que la guerrilla se está financiando a través del narcotráfico. En cualquier caso, lo que sí es claro para Acosta, es que la estrategia va a producir un escalonamiento del conflicto armado en Colombia, tanto con los paramilitares como con la guerrilla y un involucramiento cada vez mayor de los Estados Unidos en el conflicto. "Se va a ir metiendo imperceptiblemente a través de una nueva doctrina, la de la injerencia humanitaria, que se inauguró en Yugoslavia", afirmó. Si eso es lo que se quiere hay que hablar claro y ver hasta dónde las distintas organizaciones políticas y sociales están en dispo-



Foto: Mauricio Hoyos G. - CGR

Según el senador Acosta la inversión social está ausente

creto y tangible son US\$ 150 millones de España. En el caso de los créditos, según Acosta, éstos son unos recursos reembolsables que estaban previstos para financiar parte del Plan de Desarrollo, que no tienen nada que ver con el Plan Colombia. En cuanto al aporte de los Estados Unidos, éste terminó en menos de mil millones de dólares, con un énfasis muy marcado en el aspecto militar. Así las cosas, encuentra que el aspecto de la inversión social está ausente.

Por otra parte señaló que este es un plan antinarcóticos y así se

Sierra Nevada de Santa Marta. Como consecuencia de la aplicación del glifosato, desaparecieron diez ríos de los treinta y dos que tenían nacimiento en la Sierra. Anotó que aunque el cultivo de marihuana se erradicó en Colombia, no cree que la causa principal fuera la fumigación sino el hecho de que los Estados Unidos se convirtiera en productor autosuficiente de la mata. Para concluir este punto, observó que lo que va a ocurrir es el simple desplazamiento de los cultivos a otras áreas.

sición de comprometerse en una estrategia como esa.

En conclusión, señaló que quedan más dudas que certezas respecto a los objetivos del Plan Colombia.

Un gran plan policial y judicial

El Fiscal Gómez Méndez hizo algunas reflexiones sobre cómo, a pesar de haber hecho todo lo posible para desnarcotizar las relaciones exteriores en especial en los últimos años, se terminó en un plan que en el fondo es una estrategia contra el narcotráfico. Anotó que aunque la comparación no es exacta nos puede pasar algo similar a lo que le pasó a Cuba con Fidel Castro, que hizo todos los esfuerzos para que la Habana dejara de ser el burdel de los gringos y al final terminó siendo el de los haitianos, colombianos y brasileños.

En cuanto a la estrategia contra el narcotráfico encuentra que es una estrategia dirigida fundamentalmente a una parte del problema que es el de la oferta y dentro de esta a la erradicación de cultivos. Recordó que la cadena del narcotráfico comprende, adicionalmente, el consumo, las cadenas de distribución, los precursores químicos, el lavado de activos, el tráfico de armas. Rememoró que Alberto Lleras decía, cuando comenzaba el problema de la marihuana, que lo único que necesitábamos era que los americanos cuidaran sus fronteras. Podía explicarse la salida de la droga por cualquier razón -hambre, corrupción- pero no entendía que los narcotraficantes derrotaran militarmente a los americanos y por eso entrara la droga a los Estados Unidos. Para el fiscal este es un fenómeno con múltiples aristas, dentro de las cuales la erradicación de los cultivos ilícitos no es el eslabón fundamental, aunque es deseable su eliminación.

A su juicio, una estrategia orientada a combatir la oferta, de-



Foto: Mauricio Hoyos G. - CDR

Fiscal Alfonso Gómez Méndez: «el desconocimiento de las cifras debilita el Plan Colombia»

jando de lado el resto de problemas, debería centrarse en un gran plan policial y judicial, que lleve a los organismos de inteligencia a detectar la presencia de laboratorios, cadenas, lazos con la sociedad y con la política, que es lo que muchas veces hace imbatibles a los narcotraficantes. Este planteamiento fue expuesto a los congresistas americanos y eso explica el por qué a última hora se incluyen recursos para la Fiscalía.

Para Gómez, aunque no necesariamente todos los países con desequilibrios sociales tienen que ver con el narcotráfico, éste es un componente que debe tenerse en cuenta. Recordó que en la Junta Internacional de Estupefacientes en Viena, se decía que el narcotráfico es una especie de sida social porque deja a los Estados sin defensas, en la medida en que logra colocar a mucha gente del lado que no toca. Utiliza simultánea o alternativamente la coacción o la corrupción, razón por la cual ha logrado colocar muchas veces en jaque a los Estados, como sucedió en Colombia. En un ejemplo imaginario, si a un francés le ofrecen 500.000

francos por transportar droga -aunque probablemente quisiera tenerlos- lo detiene el riesgo de perder su seguridad social, vivienda, empleo, todo lo que tiene. Si eso mismo se le ofrece a un colombiano seguramente la situación sería otra.

Para finalizar señaló que, como en otros ámbitos de la vida nacional, se termina haciendo planes a ciegas. En su opinión no existen cifras exactas sobre cuántas hectáreas hay cultivadas, donde están, cuántos colombianos están dedicados al cultivo ilícito, cuánta cocaína se exporta. El desconocimiento debilita la fortaleza del Plan en cuanto no parte de datos sólidos.

No se puede esperar

El ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, destacó que en el país hay cada vez más claridad sobre el daño que ha causado el narcotráfico. Lo que es rescatable es que se aprendió la lección. En su opinión, la sociedad colombiana mayoritariamente reconoce que es necesario enfrentar el problema -cosa que no ocurría hace diez o quince años.

Según Ramírez siempre habrá oferta si hay demanda, pero no se puede esperar que la comunidad internacional tome la decisión de eliminar o reducir drásticamente la demanda, porque para ese momento la solución sería tardía. Como mencionó el Fiscal, los narcotraficantes amenazan -siempre lo han hecho- la estabilidad democrática del país, de manera que vale la pena hacer un esfuerzo por reducir la oferta con recursos externos, lo que implica que se acepta una corresponsabilidad.

Subrayó que es necesaria una estrategia integral dentro de la cual el primer componente es la reduc-

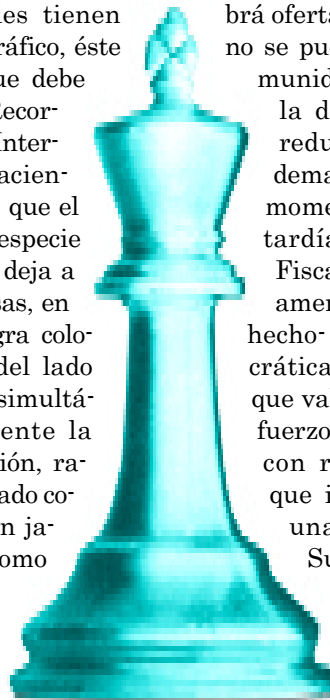




Foto: Mauricio Hoyos G. - CGR

Ministro Luis Fernando Ramírez: «hay cada vez más claridad sobre el daño que causa el narcotráfico»

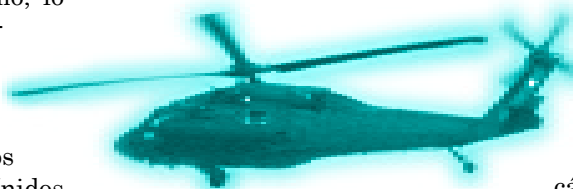
ción de la demanda, como sugirió el Fiscal, pero en la reducción de la oferta es indudable que la política de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo es una pieza fundamental.

El Plan Colombia pretende solucionar de la forma como es solucionable el tema del narcotráfico. Prevé que si Colombia logra eliminar la oferta, ésta pasaría a otros países si no hay una solución definitiva desde el punto de vista de la demanda. Por esta razón, se le ha pedido a la comunidad internacional que haga un esfuerzo adicional por reducir el consumo, lo cual hacen de manera coercitiva y coactiva. Uno de los argumentos esgrimidos por el Ministro Ramírez en sus conversaciones con los delegados de los Estados Unidos es la necesidad de revisar qué tan efectivo es el gasto en la reducción de la demanda, cuyo presupuesto hoy en día supera los 19 billones de dólares. Cree que hay preocupación al respecto, pues este gasto empieza a ser demasiado costoso.

dar ese tipo de declaración frente a un reclamo de envío de drogas.

Así mismo cree que hay que pedir un compromiso más fuerte en materia de envío de armas. El trueque en virtud del cual se exporta droga y se importan armas y precursores químicos, genera aún más violencia.

En cuanto al lavado de activos, advirtió que gran parte de las utilidades del negocio se quedan afuera, tal como indicó Amilkar Acosta. Si hipotéticamente se pudiera analizar el tema aislándolo del costo en vidas humanas, Colombia



pierde plata con el narcotráfico. Las Fuerzas Militares y la policía tienen un presupuesto anual de cerca de US\$3.000 millones al año, de los cuales el 40% se destina a combatir el narcotráfico. El gasto, en

Por otra parte, el Gobierno ha solicitado a la comunidad internacional un compromiso más contundente del control de envío de precursores químicos indispensables para producir cocaína, los cuales no se elaboran en Colombia. A veces, dijo, se reciben respuestas absolutamente insatisfactorias particularmente de algunos países europeos, como la de que Colombia debe establecer controles en sus propias fronteras. Para el Ministro esa respuesta no es justa, pues Colombia nunca se atrevería a

términos de justicia, cárceles, fuerzas militares es significativamente mayor de lo que Colombia recibe por cuenta de unas toneladas de droga que exporta. Además, señaló que la poca plata que entra deteriora la distribución del ingreso pues es para unos pocos, genera más corrupción, mayor violencia y no es utilizada para la inversión productiva. Otra cuenta que hay que cargarle al negocio es la pérdida de ingresos de inversión extranjera, básicamente porque hay una percepción de mayor riesgo por parte de los inversionistas internacionales.

Según Ramírez hay que dar un paso adicional que consiste en pedir a la comunidad internacional el acceso justo de nuestros productos legales a sus mercados, como el ingreso al Nafta. Los cultivadores de caña de azúcar, algodón o banano o los productores de textiles, se encuentran con un sistema de comercio administrado que protege a otros países. Esta situación alimenta las posibilidades de producir productos ilegales, que demanda la comunidad internacional.

Integración vertical

Ramírez se refirió a la política de erradicación o de interdicción implementada en Perú y Bolivia, la cual en su opinión se ha magnificado. Señaló que el negocio del narcotráfico cambió en los últimos años. Antes, los famosos carteles colombianos, dueños de las rutas y los mercados, compraban la hoja de coca en Perú y Bolivia, pero tomaron la decisión de sembrar en Colombia -120 mil hectáreas es el cálculo según información de los satélites- y por lo tanto no necesitaban traer la pasta de coca. El éxito de estos países -para sufortunado- radicó más en la determinación de los narcotraficantes de integrarse verticalmente, que en la implementación de programas de inter-

dicción, erradicación manual y sustitución de cultivos. Coincide con Ospina en señalar que esas políticas tienen un mérito, pero cree que los resultados logrados obedecen más a una decisión de tipo económico. Por ese motivo también el negocio del narcotráfico cambió en Colombia. Hoy hay unos carteles que son distintos al de Medellín y de Cali, que fueron desmantelados. En la actualidad son más pequeños, sofisticados, de más bajo perfil, integrados verticalmente y se han aliado con grupos al margen de la ley para que les cuiden los cultivos. No es un secreto que la guerrilla y los paramilitares reciben dineros del narcotráfico.

Anotó que como Ministro de Defensa se sentiría feliz si se pudiera acabar el problema del narcotráfico en Colombia sin disparar una bala o con mecanismos de tipo persuasivo. En su opinión, es más importante -aparte del proyecto de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo para el cual hay recursos considerables- que los productores colombianos tengan acceso justo de los productos legales a los mercados internacionales que recibir unos helicópteros. Esto arreglaría más problemas. Infortunadamente la experiencia ha mostrado que se está lidiando con gente que no está dispuesta a aceptar recomendaciones o sugerencias. Es un negocio tan rentable que los riesgos se perciben en forma diferente. La combinación del monto de la pena multiplicado por las probabilidades de ser detectados da para continuar con el negocio. Eso simplemente implica un fortalecimiento de los organismos militares, de policía y de la rama jurisdiccional.

Antes de referirse al componente puramente militar del Plan, Ramírez recordó que durante muchos años el ejército fue re-nuente a involucrarse en la lucha contra el narcotráfico, que era del dominio de la Policía, por ser un

tema doméstico de delincuencia. Sin embargo, convencidos de que es el principal elemento desestabilizador de la democracia colombiana, que alimenta con recursos a los demás grupos al margen de la ley, y el mayor generador en consecuencia de violencia, fue inevitable volcar a todas las fuerzas militares y de policía a combatir el flagelo del narcotráfico.

En el campo estrictamente militar la parte más importante, a su juicio, es la interdicción aérea. En lo que va corrido de este Gobierno se han inutilizado 48 aviones del narcotráfico, algunos de ellos derribados en el aire. La razón de otorgar esta preponderancia a la parte aérea radica en que cuando los pilotos calculen que el riesgo de sacar coca en un avión es alto, van a dejar de ir al Putumayo o al Caquetá. La segunda prioridad es el fortalecimiento de la brigada fluvial para hacer decomisos de droga, armas y precursores químicos. Como se sabe, en la Amazonía y los Llanos Orientales no hay carreteras. Allí funciona básicamente el transporte por los ríos. Por este motivo, la marina se concentró en los ríos.

En cuanto al tema de la fumigación, afirmó que él es el primer interesado en verificar que el glifosato no produzca efectos colaterales en el medio ambiente. Le preocupa sin embargo, que las organizaciones ambientalistas guarden silencio ante la destrucción de más de un millón de hectáreas en el Amazonas, o ante la contaminación de los ríos por cuenta de las toneladas de precursores químicos que se vierten en sus torrentes. Según el Ministro, los ambientalistas

se quedan cortos en sus afirmaciones por su gran desconocimiento.

Es imposible erradicar el 100% para 2005

Sobre el tema del hongo, informó que existen unos recursos reservados para la investigación que realiza Estados Unidos, pero no existe ningún compromiso por parte de Colombia de utilizarlo. En este punto aclaró que una cosa es la que dice el gobierno colombiano y otra la que aprobó el Congreso americano, lo cual se ha prestado para confusiones y para suponer que se maneja algo oculto o dos agendas distintas. Por ejemplo,

como mencionó el Senador Acosta, en el proyecto aprobado en los Estados Unidos se dice que debe eliminarse el 100% de los cultivos de coca para el año 2005. El gobierno colombiano, por otro lado, se comprometió a implementar un plan que apunte a eliminar el 50%. Se explicó hasta la saciedad que no era posible comprometerse a poner en marcha un plan mediante el cual se pudiera erradicar el 100% de los cultivos para el año 2005. En casos como este, en los que se presentan diferencias entre lo que ellos quieren y lo que puede comprometerse el Gobierno colombiano, existe la posibilidad de firmar un waiver.

El Ministro recapituló lo dicho por Juan Manuel Ospina, en el sentido de que cuando se fumiga crece el área sembrada. Tal vez, dijo, la pregunta que habría que formularse al respecto es qué pasaría si no se hubieran fumigado 43.000 hectáreas el año pasado; probablemente no tendríamos

El gasto, en términos de justicia, cárceles, fuerzas militares es significativamente mayor de lo que Colombia recibe por cuenta de unas toneladas de droga que exporta



Trigueros nariñenses antes, cocaleros en el Putumayo ahora

120.000 sino 230.000 hectáreas de coca. El Ministro coincide en señalar que la fumigación per se no soluciona el problema. Es consciente de que cuando se fumiga, hay una población que se desplaza y reanuda la tumba de otras hectáreas de selva, vuelve a cultivar y hay que volver a fumigar. Anotó que si existiera una fórmula más eficiente, estaría dispuesto a implementarla.

Para Ramírez la parte más confrontacional es la que tiene que ver con el batallón antinarcóticos y los campesinos, que no son narcotraficantes como mencionaron Acosta y Petro. Observó que hay gente en el Putumayo que quisiera sembrar yuca o plátano pero no tiene forma de vender estos productos en los mercados pues no hay carreteras. Al respecto advirtió que los programas de sustitución de cultivos tienen que contemplar elementos que permitan su rentabilidad. Hoy en día, el único producto que puede ser explotado es la coca porque se puede sacar por avión. Por este motivo, él hubiera deseado tener más recursos para interdicción aérea, con el fin de movilizar aviones AT37 o tener más radares: "allí es donde se ataca realmente al distribuidor".

En cuanto a la afirmación de Petro en el sentido de que el programa está enfocado a combatir la

guerrilla en el sur del país, señaló que aunque el énfasis inicial está centrado en el sur, esto no implica que esté enfocado a combatir la guerrilla pues en el Putumayo hay cultivos que están protegidos por paramilitares y guerrilleros. Por lo demás, el programa no para ahí: tiene que continuar hacia el Magdalena Medio, el sur de Bolívar y el Catatumbo, donde hay extensiones grandes de cultivos. De hecho, en junio de este año, antes de comenzar el Plan Colombia se fumigaron 10.000 hectáreas de coca en el Catatumbo, zona con gran presencia de paramilitares. Ramírez contó que absolutamente todos los helicópteros y aviones que estaban fumigando fueron ametrallados por estos grupos. En cuanto al tema del paramilitarismo, le preocupa que como sociedad nos hemos quedado en una discusión incompleta, que ha girado en torno a si hay militares amigos de los paramilitares pero no se ha dado el debate de la financiación por parte de la sociedad civil a los grupos de autodefensa, que es igual o más responsable de que estos grupos existan en Colombia.

Para finalizar precisó que el Plan Colombia no pretende solucionar todos los problemas del país; sí tiene un énfasis en combatir el narcotráfico, tiene programas colaterales importantes de sustitución de cultivos y de atención a la población desplazada y se esperaba que tuviera algún efecto en la reactivación económica. En su concepto, la combinación del mecanismo de persuadir y hacer que la comunidad internacional acepte la corresponsabilidad, junto con la decisión de reducir la oferta, apunta a que se acabe por conveniencia propia con el flagelo del narcotráfico en el país.

Una veeduría binacional

Monseñor Nel Beltrán explicó que con un grupo de obispos aclaró que no hablaba en nombre de la Conferencia Episcopal estudiaron el problema del Plan Colombia. Piensan que sus objetivos son deseables pero incompletos, un poco desproporcionados en la manera de articularlos y que el Plan mismo no parece ser la solución definitiva en la lucha contra el narcotráfico. En su opinión, no hay suficiente coherencia entre los fines y los medios. Desde la perspectiva de la validez ética, se preguntan si un programa con tan alto costo social, económico y político, contribuye realmente a la solución del problema. No está seguro de que se vayan a obtener resultados eficaces, en términos de erradicación y desaparición del narcotráfico, y por el contrario cree que se generan nuevos problemas. El grupo de obispos opina que el Plan tiene elementos desestabilizadores que si no se manejan con cuidado serían terribles en el campo de lo social. Los que trabajan con los



Foto: Mauricio Hoyos G. - CBR

Monseñor Nel Beltrán: el Plan requiere una veeduría binacional

desplazados, por ejemplo, saben lo que significa prepararse para recibir otra oleada de desplazados, "cuando no somos capaces ni de ponerle paños de agua tibia a lo poco que hacemos", anotó. Así mismo, señaló que podría tener efectos nocivos sobre la política de paz del Estado colombiano. Valdría la pena que se tuviera en cuenta la posibilidad de revisar el Plan Colombia para ponerlo dentro de una perspectiva que le ofrezca al país pistas de solución. En su opinión todavía hay mucho por hacer. Se podría organizar un frente común en el cual la sociedad civil tenga tres actitudes fundamentales frente al Plan. En primer lugar, ser profundamente críticos y tener la oportunidad de expresarlo y que los medios de comunicación sean suficientemente sensibles a una discrepancia democrática. En segundo lugar estar vigilantes y, por último, ser muy constructivos porque se podrían presentarse múltiples elementos que inducirían a la recomposición del Plan.

Le parece que el Plan requeriría de una veeduría pluralista binacional -de la sociedad civil y del Estado, y no solamente del Estado para que pueda ser más imparcial-, que acompañe la aplicación del Plan, la cual, en su concepto, debería haberse previsto antes de su aprobación.

Para el obispo Beltrán lo más lamentable del proyecto es que sea tan exclusivamente militar. Los obispos creen que una recomposición de la justicia y la reconstrucción de una ética nacional son elementos más decisivos en la lucha contra el flagelo que la fumigación y la solución militar.

Anhelan que a Colombia le vaya bien. "Todos estamos interesados y todos estamos afectados", señaló. Sin embargo, cree que habría que implementar algo más integral, que tenga más componentes humanistas.

La droga es un obstáculo para construir Estado

Alvaro Uribe observó que, salvo algunas anotaciones críticas, ha apoyado el Plan Colombia en sus intervenciones públicas. Cree que el país tiene que aprovechar la coyuntura del Plan para deshacerse definitivamente de la droga, que en su opinión es un obstáculo muy eficaz para construir comunidad, lazos de solidaridad, respeto a la ley y cultura productiva, es decir para construir Estado. Si se utiliza el concepto de "cultura mafiosa" de Garay, se ve cómo el narcotráfico

acabó con la cultura productiva de nuestra economía. En su concepto, es difícil hacer viable el proceso de paz con la guerrilla, y mañana o pasado mañana con los paramilitares, mientras no se avance sustancialmente en la derrota de la droga. Cree que lo ideal sería derrotarla a nivel continental, pero si Estados Unidos no hace el esfuerzo en materia de control de la demanda, de los precursores químicos y del lavado de dólares, al menos la comunidad hispanoamericana tiene que derrotar la producción. Uribe teme que si no hay una estrategia de la comunidad hispanoamericana, el narcotráfico encontrará una zona para sustituir los cultivos que se eliminan en Colombia. Afirmó que la estrategia no puede ser solamente colombiana; es necesario incorporar a Venezuela, los países centroamericanos y el sur de México.

Sobre el tema de la erradicación de los cultivos, Uribe indicó que es difícil hablar de erradicación mecánica en un país donde hay

120.000 hectáreas sembradas pues es más lo que hay que erradicar que lo que se puede sustituir con cultivos alternativos, pero sí se puede hacer algún esfuerzo para vincular el campesinado a la erradicación mecánica. Señaló que

existen dificultades para implementar programas de sustitución en razón a que los suelos son frágiles y las áreas están a centenas de kilómetros de las carreteras. Por estas razones cree que, en una primera etapa, hay que buscar una manera envolvente y pragmática con sentido social de llegar con un subsidio a los 50.000 campesinos vinculados directa-

mente a los cultivos. Recordó que en la Gobernación de Antioquia seleccionaron 2.100 familias de la Serranía de Abibe y de la rivera del Atrato, y les dieron un subsidio anual por hectárea erradicada, el cual se financió con recursos de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Medio Ambiente y la Gobernación. Como contrapartida, los campesinos se comprometieron a no volver a sembrar droga y a cuidar y recuperar el bosque. Después se enriqueció el programa con plantas y maderas finas que entregó la Secretaría de Agricultura.

No cree en una política general de reparto de tierras como única solución. "Cuando escuchaba al doctor Petro pensaba en la meseta nariñense entre Pasto e Ipiales". Recordó que es una tierra sumamente fértil con una estructura de la propiedad bastante democrática. Con la apertura se acabó con los cultivos de cebada y trigo de esa región pues, se dijo, el país no podía seguir con unos cultivos cuya



Foto: Mauricio Hoyos G. - CGR

Alvaro Uribe: «en Antioquia había buenos resultados de erradicación manual»



Alvaro Uribe: «el ideal es involucrar al campesino en la recuperación del bosque»

productividad era de tonelada y media por hectárea, cuando en Canadá, Argentina, los Estados Unidos y Europa se producen ocho toneladas por hectárea. En la medida en que los cultivos alternativos no llegaron a Nariño, el campesinado emigró a sembrar coca al Putumayo. Para Uribe, Nariño es el ejemplo de que el problema no es de estructura de la propiedad. Lo que falló fue la política macroeconómica frente al campo, que empujó el campesinado hacia la coca. En su opinión, en algunas regiones es válido hacer reforma agraria para recuperar las condiciones de provisión del campo, pero el país tiene que equilibrar esa política con la de cuidar aquel capital del sector empresarial agrario que todavía subsiste.

Según Uribe, el Plan Colombia tiene que ser sostenible en la parte social, para lo cual hay que tener audacia en buscar unas buenas estrategias sociales y una financiación permanente. Sueña con involucrar al campesinado en la recuperación del bosque «teniendo en cuenta que con excepción de dos o tres lugares en el país, el bosque se puede regenerar casi espontáneamente. Un planteamiento como este ayudaría a buscar recursos permanentes del Parlamento Europeo, porque si bien en los Estados Unidos financian la parte militar es claro que en Europa sólo van a cofinanciar la parte social. Si eso se logra, concluyó, el componente militar no va a tener que ser ofensivo,

sino de detente, disuasivo; no habría un campesinado en armas contra el Plan Colombia, que provoca un choque con los batallones antinarcóticos.

El plan Colombia es un hecho

Para Juan Sebastián Betancur el Plan Colombia es un hecho. Como es un hecho hay que ponerse de acuerdo en leer el mismo texto «en su opinión el norteamericano que ya es una ley», en cómo se traduce, quién lo traduce y qué precisión idiomática y de alcance gramatical debe tener, porque si no, vamos a discutir sobre cosas que no se van a entender. Incluso, precisó que el título del Plan está mal puesto: al mejor estilo alemán debería llamarse Elementos para el inicio de la erradicación de los cultivos ilícitos en Colombia. Pero se escogió el nombre de Plan Colombia y por eso, como dice el senador Acosta, parece un plan de desarrollo.

Se preguntó qué hubiera sucedido si no existiera guerrilla ni autodefensas: ¿habría existido un Plan Colombia? Observó que muchos frentes de ambos grupos se han situado en lugares donde hay dólares, es decir donde están los productos de exportación como el petróleo, banano, oro, café, diamantes y esmeraldas y más recientemente las drogas, que por ser ilegales, hacen más complejo el asunto. Para Betancur hay elementos geopolíticos vinculados a la economía de exportación que complican la discusión. Señaló, por ejemplo, que se ha creído que por empezar en el sur, parecería que se pretende pro-

teger a unos grupos determinados, aspecto que Ramírez aclaró.

En su opinión, no nos podemos asustar con el compromiso adquirido con el Plan, pero hay que andar con mucho cuidado respecto al proceso de paz, para vincular a las Farc y al Eln.

En cuanto al tema de la financiación anotó que, por un lado, la guerrilla sostiene que está dispuesta a erradicar los cultivos, pero hay que tener en cuenta que hay frentes a los que les interesa mantener el cultivo pues esa es su fuente de financiación. Se sabe que es un punto crucial e incluso se ha discutido si debe haber una financiación sui generis «una fiducia o un fondo especial, en lenguaje empresarial», un seguro de desempleo para quienes se desmovilizan en el caso de que haya un cese de hostilidades.

Le llamó la atención la propuesta del monseñor Beltrán, pero la ampliaría. La veeduría no debería ser binacional sino bi-internacional para que mire cómo se realiza el proceso de erradicación de cultivos, que podría al mismo tiempo aprovecharse, sin hacerle trampas, en el proceso de paz. Además es una cuestión que han planteado las Farc respecto a Cartagena del Chairá.

Por último explicó que no cree en la erradicación de cultivos como la ha propuesto Alvaro Uribe, sino en la sustitución de tierras que es algo muy distinto. Para Betancur, en el tema de la reforma agraria, hay un activo más valioso y más im-

portante que la tierra, que es la tecnología, asunto que está en el orden del día en el mundo: cómo emplear la tecnología con menos tierra. ■



Foto: Mauricio Hoyes G. - CCR

Juan Sebastián Betancur: «el título del Plan está mal puesto»